

<http://www.state.gov/g/drl/rls/irf/2009/127384.htm>

Colombia

Informe internacional sobre la libertad religiosa y de culto 2009 Publicado por la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo

La Constitución otorga la libertad religiosa y de cultos, y otras leyes y políticas contribuyen a la práctica generalmente libre de la religión. No existe una religión estatal; no obstante, la Iglesia Católica mantiene una condición privilegiada.

En la práctica, por lo general el Estado respeta la libertad religiosa y de cultos. No hubo cambios en el estado del respeto por la libertad religiosa y de cultos durante el período abarcado por este informe. Las organizaciones terroristas, sobre todo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc) asesinaron, secuestraron y extorsionaron a líderes religiosos y sus feligreses, impidiéndoles la libre expresión de la fe. Por lo general, las organizaciones terroristas amenazaron a líderes religiosos y feligreses, más por razones políticas que religiosas. El Ejército de Liberación Nacional (ELN) continuó amenazando a miembros de organizaciones religiosas, pero en general respetó su acuerdo de acabar con los homicidios de líderes religiosos. Algunos antiguos miembros de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) que se negaron a desmovilizarse y nuevos grupos delictivos, incluyendo las Águilas Negras, también atacaron a los representantes y miembros de organizaciones religiosas. Algunos líderes indígenas, según se dice, fueron intolerantes con los cultos no-sincréticos.

Hubo algunos informes de abuso o discriminación por parte de la sociedad con base en prácticas o creencias religiosas.

El Gobierno de EE.UU. trata con el Estado el tema de la libertad religiosa y de cultos como parte de su política general para fomentar los derechos humanos.

Sección I. Demografía religiosa

El país abarca un área de 439.735 millas cuadradas y una población aproximada de 45 millones de habitantes. El Estado no conserva estadísticas oficiales sobre la afiliación religiosa y los líderes religiosos citan diferentes cifras. Según el Consejo Evangélico de Colombia (Cedecol), por ejemplo, aproximadamente el 15 por ciento de la población es protestante, mientras que la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica estima que el 90 por ciento es católica. Un artículo publicado en 2007 por el diario *El Tiempo* afirma que el 80 por ciento de la población es católico, aunque no todos son practicantes; el 13,5 por ciento pertenece a formas no católicas del cristianismo; el 2 por ciento son agnósticos y el restante 4,5 por ciento pertenece a otros grupos religiosos como el islamismo y el judaísmo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día y la Iglesia Metodista cuentan con 261.000 y 1.500 miembros, respectivamente. La Iglesia Anglicana y la Iglesia Presbiteriana cuentan aproximadamente 50.000 miembros cada una. Otras iglesias protestantes y evangélicas tienen aproximadamente 5 millones de seguidores. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (mormones) afirma tener alrededor de 150.000 miembros. Entre los grupos religiosos con un importante número de practicantes están el judaísmo, con 5.000 miembros; el islamismo con aproximadamente 10.000 seguidores, el animismo y varias otras creencias sincretistas.

Los creyentes de algunos grupos religiosos están concentrados en regiones geográficas específicas. Por ejemplo, la amplia mayoría de los practicantes de una religión sincretista

que mezcla el catolicismo con elementos del animismo africano son los afrocolombianos, residentes en el departamento de Chocó, al occidente del país. Los judíos se encuentran ubicados en las principales ciudades, los musulmanes en la Costa Atlántica y los creyentes del animismo indígena en las áreas rurales remotas. Existe una pequeña comunidad colectiva taoísta en un sector rural en las montañas del departamento de Santander.

Sección II. Estatus de la libertad religiosa y de cultos

Marco legal y de políticas

La Constitución otorga la libertad religiosa y de cultos, y otras leyes y políticas contribuyen a la práctica generalmente libre de la religión. La Constitución prohíbe específicamente la discriminación con base en la religión.

La Constitución estipula que no existe una iglesia o religión oficial, pero añade que el Estado "no es atea ni agnóstico, ni indiferente a los sentimientos religiosos de los colombianos". Algunos interpretan esto como si el Estado demostrara un favoritismo extraoficial hacia la Iglesia Católica, la cual fue la religión oficial del país hasta la adopción de la Constitución de 1991. Continúa vigente un Concordato de 1973 entre el Vaticano y el Estado, aunque algunos de sus artículos ya no son ejecutables debido a ciertas disposiciones constitucionales sobre la libertad religiosa y de cultos. Una decisión tomada por la Corte Constitucional en 1994 declaró inconstitucional cualquier referencia oficial del Estado a una caracterización religiosa del país.

Los siguientes festivos cristianos son festivos nacionales: Epifanía, Día de San José, Domingo de Ramos, Jueves Santo, Viernes Santo, Domingo de Resurrección, Ascensión, Corpus Christi, Sagrado Corazón, San Pedro y San Pablo, Asunción de María, Día de Todos los Santos, Inmaculada Concepción y Navidad.

El Estado extiende dos tipos de reconocimiento a las organizaciones religiosas: el reconocimiento de la iglesia como personería jurídica, y el reconocimiento público especial como entidad religiosa. Aunque el proceso con frecuencia es demorado, el Ministerio del Interior y Justicia (MinJusticia) otorga fácilmente el reconocimiento anterior; el único requisito legal es: la presentación de una solicitud formal y la información básica organizacional. Además, cualquier culto religioso extranjero que desee establecerse en el país, debe ante todo documentar reconocimiento oficial por parte de las autoridades de su país de origen. MinJusticia puede rechazar cualquier solicitud que no cumpla a cabalidad con los requisitos establecidos, o que viole los derechos constitucionales fundamentales. Algunos líderes religiosos no católicos se quejaron de que sus solicitudes fueron demoradas innecesariamente y sus solicitudes de reconocimiento como entidades legales fueron negadas por razones triviales. Declararon que por esta razón, muchos grupos religiosos no católicos decidieron no solicitar reconocimiento legal y, en cambio, prefirieron operar como Organizaciones No Gubernamentales (ONG) o entidades religiosas informales.

Desde 1995 MinJusticia aprobó 1.182 solicitudes de reconocimiento público especial como entidad religiosa, de las cuales aproximadamente el 90 por ciento fueron otorgadas a iglesias evangélicas. Según MinJusticia, 1.859 solicitudes no cumplieron con los requisitos establecidos por la Constitución y por lo tanto no fueron aprobadas. En los casos en los que las iglesias o las escuelas individuales afiliadas a una iglesia registrada a nivel nacional solicitase por separado un reconocimiento público especial, el Estado les otorga el estatus de afiliada o asociada. Más de 40 iglesias solicitaron al Estado respaldar una legislación que estableciera estándares menos exactos para el reconocimiento público y codificar formalmente la libertad religiosa y de cultos garantizada por la Constitución, creando una

oficina especial para asuntos religiosos. Aunque el MIJ cuenta con la autoridad estatutaria sobre el reconocimiento de entidades religiosas, no existe ninguna agencia gubernamental que monitoree ni regule las leyes que gobiernan la libertad religiosa y de cultos.

Las religiones no católicas que deseen atender a sus fieles o adherentes a través de instituciones públicas tales como hospitales o prisiones, o que deseen realizar matrimonios reconocidos por el Estado, deben adherirse a un Acuerdo de Derecho Público de 1997 suscrito entre dichas organizaciones y el Estado. Al decidir si se otorga acceso al Acuerdo de 1997, el Estado tiene en cuenta el número total de feligreses, su grado de aceptación popular en la sociedad, y otros factores de relevancia como el contenido de los estatutos de la organización y las normas de conducta exigidas. Hasta el momento de la publicación de este informe, 13 iglesias cristianas no católicas habían recibido este reconocimiento especial. Ninguna religión no cristiana se ha suscrito al Acuerdo de Derecho Público de 1997. Algunos de los más destacados grupos religiosos no cristianos, como la comunidad judía, no han buscado adherirse a la ley pública de 1997, declarando que el acuerdo había sido designado para los grupos protestantes. Muchas iglesias firmantes del Acuerdo informan que algunas autoridades regionales no cumplieron con él.

El Ministerio de Relaciones Exteriores emite visas a los misioneros extranjeros y a los administradores religiosos de las denominaciones que han recibido reconocimiento público especial. Los misioneros extranjeros deben poseer una visa especial, válida hasta por dos años. Los solicitantes deben poseer un certificado emitido por MinJusticia confirmando que la religión está registrada ante el Ministerio, o un certificado emitido por la arquidiócesis católica. Otra alternativa es presentar un certificado emitido por la institución religiosa misma confirmando la afiliación del solicitante y su misión en el país, al igual que una carta emitida por un representante legal de una organización religiosa declarando que la organización acepta toda responsabilidad financiera por los gastos incurridos por el solicitante y su familia, incluyendo su regreso al país de origen o último país de residencia. En ambos casos los solicitantes deben explicar el propósito de viaje en cuestión y presentar pruebas de solvencia económica. Por lo general el Estado permite el proselitismo de los misioneros entre la población indígena, siempre y cuando éste sea bien recibido y no obligue a los miembros de las comunidades indígenas a adoptar cambios que puedan arriesgar su supervivencia en sus tierras. La Corte Suprema estipuló que ningún grupo puede obligar a las comunidades indígenas a convertirse a una religión.

La Constitución reconoce el derecho de los padres a elegir el tipo de educación que reciben sus hijos, incluyendo la enseñanza religiosa. También establece que ningún estudiante puede ser obligado a recibir enseñanza religiosa en las escuelas públicas. Las religiones sin reconocimiento especial alguno pueden establecer centros docentes parroquiales, siempre y cuando cumplan con las normas exigidas por el Ministerio de Educación Nacional. Por ejemplo, la comunidad judía opera sus propios planteles educativos. La Iglesia Católica tiene un acuerdo único con el Estado para suministrar escuelas en sectores rurales que no cuentan con planteles educativos estatales. Estos planteles también están exentos de impuestos. Algunos líderes de grupos religiosos no católicos reclamaron que las autoridades locales en muchos municipios no concedieron a sus planteles educativos la misma exención de impuestos que a las escuelas católicas. Estos líderes también señalaron que un decreto pronunciado por el Ministerio de Educación para incluir la educación religiosa en las escuelas públicas estaba siendo interpretado en muchos municipios como un mandato para enseñar solamente el catolicismo en las escuelas, sin ofrecer una alternativa de instrucción a los estudiantes de otros grupos religiosos. No obstante, Cedecol notó un progreso significativo y señaló que los problemas continuaban solamente en las áreas rurales.

Restricciones sobre la libertad religiosa y de cultos

Por lo general, y en la práctica, el Estado respeta la libertad religiosa y de cultos. No hubo cambios en el estado del respeto por la libertad religiosa y de cultos durante el período abarcado por este informe.

Aunque la Constitución de 1991 ordena la separación de la Iglesia y el Estado, la Iglesia Católica mantiene un rango privilegiado *de facto*. La participación en el Acuerdo de 1997 es un requisito para los grupos no católicos que deseen atender a los soldados, pacientes en hospitales públicos, y prisioneros, y ofrecer instrucción religiosa en las escuelas públicas. No obstante, líderes musulmanes y protestantes señalaron tener dificultades para obtener cargos de capellanes militares y acceso a los prisioneros.

El Estado reconoce los matrimonios celebrados sólo por la Iglesia Católica, las 13 organizaciones religiosas no católicas suscritas al Acuerdo de Derecho Público de 1997, y los grupos religiosos con un estado de asociación a uno de esos firmantes. Los miembros de los grupos religiosos que no sean firmantes del Acuerdo deben contraer matrimonio en una ceremonia civil para que el Estado les reconozca el matrimonio. Algunos firmantes del acuerdo se han quejado de discriminación regional, como es el caso de algunas autoridades municipales que se han negado a reconocer matrimonios celebrados por estos grupos.

Cedecol afirma que los dos canales estatales de televisión se negaron a permitir que los grupos evangélicos adquirieran o recibieran tiempo al aire, mientras que la Iglesia Católica recibe un minuto diario sin costo alguno.

Todas las iglesias, seminarios, monasterios y conventos legalmente reconocidos están exentos de impuestos nacionales y regionales y aranceles aduaneros. No obstante, Cedecol reclama que esto no es respetado en la práctica, y algunos grupos religiosos no católicos informaron que las autoridades municipales les exigen pagar impuestos prediales y otros impuestos locales en sus lugares de culto y escuelas. Según un artículo publicado en 2006 por el diario *El Espectador*, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió un decreto requiriendo que todos los lugares de culto no católicos pagaran un impuesto del cuatro por ciento en todos los diezmos, ofrendas y contribuciones caritativas recibidas. Según Cedecol, los misioneros no católicos y líderes religiosos también deben pagar un impuesto del 17 por ciento por todas las contribuciones financieras recibidas de fuera del país.

En 2006 el distrito capital de Bogotá estableció una reglamentación de construcción que restringió el número de iglesias en los sectores residenciales y estableció estrictos códigos de construcción para las iglesias. La ciudad concedió a las congregaciones hasta el 2015 para implementar ciertas medidas de seguridad a sus instalaciones, incluyendo protección contra incendios, acceso para los discapacitados y otros aspectos de seguridad. El Secretario Ejecutivo de Cedecol señaló que la ordenanza era un paso positivo y no mostraba favoritismo hacia la Iglesia Católica. Añadió que las iglesias católicas eran generalmente más antiguas y estaban exentas de algunos estándares debido a su estatus histórico y arquitectónico.

No hubo informes sobre prisioneros o detenidos por motivos religiosos en el país.

Conversión religiosa obligatoria

No hubo informes de conversión religiosa obligatoria, incluyendo la de ciudadanos estadounidenses menores de edad que hubiesen sido secuestrados o ilegalmente retirados de Estados Unidos, ni de que a dichos ciudadanos se les hubiese negado el regreso a Estados Unidos.

Abusos cometidos por fuerzas extranjeras u organizaciones terroristas

Hubo líderes religiosos y feligreses que fueron blanco de amenazas y secuestro por parte de grupos guerrilleros, ex paramilitares que se negaron a desmovilizarse, y nuevos grupos rebeldes, más por razones políticas o económicas que religiosas. Estos grupos fueron los responsables de la gran mayoría de estos ataques y amenazas, homicidios, secuestros y extorsiones, impidiéndoles la libre expresión de la fe.

La Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación continuó investigando los homicidios de 14 miembros del clero en los últimos años, que se cree fueron asesinados por criticar abiertamente las organizaciones terroristas. El Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH informó que casi todas las muertes de sacerdotes a manos de grupos terroristas podían atribuirse a guerrilleros de izquierda, sobre todo de las FARC. Los líderes de la iglesia católica y la protestante notaron que las matanzas de los líderes religiosos en las comunidades rurales no eran reportadas debido al aislamiento de la comunidad o por temor a una retribución. Por lo general, los líderes religiosos prefieren no solicitar la protección del Estado debido a sus creencias pacifistas o por temor a retribución por parte de grupos terroristas. Una organización de derechos humanos afiliada a la iglesia menonita, el Centro Cristiano para Justicia, Paz y Acción Noviolenta (Justapaz), y Cedecol, afirmaron que la guerrilla, los ex paramilitares y los nuevos grupos delictivos cometieron actos violentos por igual contra los líderes de la iglesia evangélica. Los nuevos grupos delictivos, incluyendo las Nuevas Fuerzas de Autodefensa Bolivariana y las Águilas Negras, atacaron organizaciones de derechos humanos. Algunos trabajadores religiosos que participaban en actividades de derechos humanos, recibieron amenazas de muerte.

La mayoría de los grupos religiosos informaron que debido a las amenazas de la guerrilla, ex paramilitares y los nuevos grupos delictivos, muchas autoridades religiosas se vieron obligadas a no tratar en público el tema del conflicto armado. Los grupos armados al margen de la ley, incluyendo a las Farc, amenazaron o atacaron a funcionarios religiosos por oponerse al reclutamiento forzado de menores, fomentar los derechos humanos, ayudar a los desplazados y desestimular el cultivo de la coca. La Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica también informó que la guerrilla, los ex paramilitares y los nuevos grupos delictivos amenazaron de muerte a los sacerdotes de las áreas rurales que hablaran contra ellos. En respuesta a tales amenazas, algunos líderes religiosos se reubicaron a otras comunidades.

Guerrilleros, ex paramilitares y los nuevos grupos delictivos acosaron a algunos grupos indígenas que practican religiones animistas o sincréticas. No obstante, generalmente, estos acosos parecen ser motivados por diferencias políticas o económicas (ya sean reales o percibidas) o por cuestiones de tenencia de tierras, más que por razones religiosas.

Sección III. Actitudes de la sociedad

Hubo algunos informes sobre abusos sociales o discriminación con base en creencia o práctica religiosa. La Iglesia Católica y algunas de las iglesias evangélicas informaron que algunos líderes indígenas eran intolerantes con los cultos no-sincréticos.

Algunas organizaciones no gubernamentales religiosas promueven los derechos humanos, el desarrollo social y económico, y un acuerdo negociado al conflicto armado del país. Las más influyentes de estas organizaciones o están afiliadas a la Iglesia Católica, o fueron fundadas por representantes de la Iglesia. La Iglesia Católica continúa siendo la única presencia institucional en muchos sectores rurales y lleva a cabo una importante labor social a través de su Secretariado Nacional de Pastoral Social.

Sección IV. Política gubernamental de EE.UU.

El Gobierno de EE.UU. trata con el Estado los temas relacionados con la libertad de cultos en el contexto de su política sobre protección de los derechos humanos. La Embajada de Estados Unidos mantiene contacto permanente con representantes de la Iglesia Católica, otras denominaciones cristianas y otras religiones.

Publicado el 26 de octubre de 2009

#####

Colombia

BUREAU OF DEMOCRACY, HUMAN RIGHTS, AND LABOR

International Religious Freedom Report 2009

October 26, 2009

The Constitution provides for freedom of religion, and other laws and policies contributed to the generally free practice of religion. There is no state religion; however, the Roman Catholic Church retains a de facto privileged status.

The Government generally respected religious freedom in practice. There was no change in the status of respect for religious freedom by the Government during the reporting period. Terrorist organizations, especially the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC), killed, kidnapped, and extorted religious leaders and practitioners, inhibiting free religious expression. Terrorist organizations generally targeted religious leaders and practitioners for political rather than religious reasons. The National Liberation Army (ELN) continued threatening members of religious organizations but generally adhered to its agreement to cease killing religious leaders. Former United Self-Defense Forces (AUC) members that refused to demobilize and new criminal groups, including the Aguilas Negras, also targeted representatives and members of religious organizations. Some indigenous leaders reportedly were intolerant of nonsyncretic forms of worship.

There were some reports of societal abuses or discrimination based on religious affiliation, belief, or practice.

The U.S. Government discusses religious freedom with the Government as part of its overall policy to promote human rights.

Section I. Religious Demography

The country has an area of 439,735 square miles and a population of 45 million. The Government does not keep statistics on religious affiliation, and estimates from religious leaders varied. According to the Colombian Evangelical Council (CEDECOL), approximately 15 percent of the population is Protestant, while the Catholic Bishops' Conference estimates that 90 percent of the population is Catholic. A 2007 article in the daily newspaper *El Tiempo* claims that 80 percent of the population is Catholic, although not all are practicing; 13.5 percent of the population belongs to non-Catholic Christian groups, 2 percent is

agnostic, and the remaining 4.5 percent belongs to other religious groups, such as Islam and Judaism. Other membership estimates include Seventh-day Adventists, 261,000; Anglicans and Presbyterians, 50,000 each; Methodists, 1,500; other Protestants and evangelicals, 5 million; The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints (Mormons), 150,000; Muslims, 10,000; and Jews, 5,000. Practitioners of animism and various syncretic beliefs are also present.

Adherents of some religious groups are concentrated in certain geographical regions. For example, the vast majority of practitioners of syncretic beliefs that blend Catholicism with elements of African animism are Afro-Colombian residents of the western department of Choco. Jews are found in major cities, Muslims on the Caribbean coast, and adherents of indigenous animistic religions in remote, rural areas. A small Taoist commune exists in a mountainous region of Santander Department.

Section II. Status of Government Respect for Religious Freedom

Legal/Policy Framework

The Constitution provides for freedom of religion, and other laws and policies contributed to the generally free practice of religion. The Constitution specifically prohibits discrimination based on religion.

The Constitution states that there is no official church or religion, but adds that the State "is not atheist or agnostic, nor indifferent to Colombians' religious sentiment." Some interpret this to mean that the state unofficially sanctions a privileged position for Catholicism, which was the official religion until the adoption of the 1991 Constitution. A 1973 concordat between the Vatican and the Government remains in effect, although some of its articles are unenforceable because of constitutional provisions on freedom of religion. A 1994 constitutional court decision declared unconstitutional any official government reference to a religious characterization of the country.

The Government observes Epiphany, Saint Joseph Day, Palm Sunday, Holy Thursday, Good Friday, Easter, the Ascension, Corpus Christi, Sacred Heart Day, Saints Peter and Paul Day, the Feast of the Assumption, All Saints' Day, the Immaculate Conception, and Christmas as national holidays.

The Government extends two different kinds of recognition to religious organizations: recognition as a legal entity (*personeria juridica*), and special public recognition as a religious entity. Although the application process is often lengthy, the Ministry of Interior and Justice (MOIJ) readily grants the former recognition; the only legal requirements are submission of a formal request and basic organizational information. In addition, any foreign religious group that wishes to establish a presence must document official recognition by authorities in its home country. The MOIJ may reject requests that do not comply fully with established requirements or that violate fundamental constitutional rights. Some non-Catholic religious leaders complained that their applications were unnecessarily delayed and that their petitions for recognition as legal entities were denied for trivial reasons. They stated that for this reason some non-Catholic religious groups chose not to apply for legal recognition and instead operated as non-governmental organizations (NGOs) or as informal religious entities.

Since 1995 the MOIJ has approved 1,182 applications for special public recognition as a religious entity; an estimated 90 percent of the approvals were for evangelical churches. According to the MOIJ, 1,859 applications failed to meet constitutionally established requirements and thus were not approved. In cases in which individual churches or schools affiliated with a nationally registered church applied separately for special public recognition, the Government granted those organizations affiliate or associate status. More than 40 churches asked the Government to sponsor legislation establishing less exacting standards

for special public recognition, formally codifying religious freedoms provided in the Constitution, and creating a special office for religious affairs. Although the MOIJ has statutory authority over recognizing religious entities, there is no government agency to monitor or enforce laws governing religious freedom.

Accession to a 1997 public law agreement between the state and non-Catholic religious groups is required for such organizations to minister to their adherents in public institutions such as hospitals or prisons, provide chaplaincy services and religious instruction in public schools, and perform marriages recognized by the state. When deciding whether to grant accession to the 1997 agreement, the Government considers a religious group's total membership, its degree of acceptance within society, and other relevant factors, such as the content of the organization's statutes and its required behavioral norms. At the end of the reporting period, 13 non-Catholic churches had been granted accession. No non-Christian religious group was a signatory to the 1997 public law agreement. Some prominent non-Christian religious groups, such as the Jewish community, chose not to accede to the 1997 public law, declaring that the agreement was designed for Protestant groups. Many churches that are signatories reported that some local authorities failed to comply with the accord.

The Ministry of Foreign Relations issues visas to foreign missionaries and administrators of religious groups that received special public recognition. Foreign missionaries are required to possess a special visa, valid for up to two years. Applicants must have a certificate from the MOIJ confirming that their religious group is registered with the Ministry or a certificate issued by the Catholic archdiocese. Alternatively, they may produce a certificate issued by the religious organization confirming the applicant's membership and mission in the country, as well as a letter issued by a legal representative of the religious organization stating that the organization accepts full financial responsibility for the expenses of the applicant and his family, including return to their country of origin or last country of residence. In both cases, applicants must explain the purpose of the proposed sojourn and provide proof of economic means. The Government generally permits missionaries to proselytize among the indigenous population, provided that the indigenous group welcomes proselytization and visitors do not induce members of indigenous communities to adopt changes that endanger their survival on traditional lands. The Supreme Court stipulated that no group may force religious conversion on members of indigenous communities.

The Constitution recognizes the right of parents to choose the type of education their children receive, including religious instruction. It also states that no student shall be forced to receive religious education in public schools. Religious groups that have not acceded to the public law agreement may establish their own schools, provided they comply with Ministry of Education requirements. For example, the Jewish community operates its own schools. The Catholic Church has an agreement with the Government to provide education in rural areas that have no state-operated schools. These schools are tax-exempt. Leaders of non-Catholic religious groups claimed that local authorities in many municipalities did not grant their schools the same tax-exempt status enjoyed by Catholic schools. These leaders also alleged that a decree by the Minister of Education to include education about religion in public schools was interpreted in many municipalities as a mandate to teach about Catholicism only, while offering no alternative instruction to students of other religious groups. CEDECOL, however, noted significant progress, and that problems remained only in rural areas.

Restrictions on Religious Freedom

The Government generally respected religious freedom in practice. There was no change in the status of respect for religious freedom by the Government during the reporting period.

Although the 1991 Constitution mandates separation of church and state, the Catholic Church retains a de facto privileged status. Accession to the 1997 public law agreement is required for non-Catholic groups to minister to military personnel, public hospital patients, and prisoners, and to provide religious instruction in public schools. Muslim and Protestant leaders claimed difficulties in acquiring military chaplain positions and gaining access to prisoners.

The state recognizes as legally binding only those religious marriages celebrated by the Catholic Church and the 13 non-Catholic religious organizations that are signatories to the 1997 public law agreement, as well as religious groups with an associate status. Members of religious groups that are neither signatories to the agreement nor associates must marry in a civil ceremony in order for the state to recognize the marriage. Some signatories to the agreement complained of discrimination at the local level, such as refusal by municipal authorities to recognize marriages performed by these groups.

CEDECOL claimed that two state-operated television channels refused to allow evangelical groups to buy or receive airtime, while the Catholic Church received one minute of airtime daily without cost.

All legally recognized churches, seminaries, monasteries, and convents are exempt from national and local taxes and customs duties; however, CEDECOL claimed that this was not respected in practice and that reportedly municipal governments required some non-Catholic religious groups to pay property and other local taxes on their places of worship and schools. According to a 2006 article in the daily newspaper *El Espectador*, the Treasury Department issued a decree requiring all non-Catholic places of worship to pay a 4 percent tax on all tithes, offerings, and charitable contributions. According to CEDECOL, non-Catholic missionaries and religious leaders must also pay a 17 percent tax on all financial assistance received from abroad.

In 2006 the Bogotá municipal government passed a city planning ordinance that restricted the number of churches in residential areas and imposed stringent building codes on church facilities. The city granted congregations until 2015 to implement fire safety, disabled access, and other security standards. The Executive Secretary of CEDECOL stated that the ordinance was a positive step and did not show favoritism toward the Catholic Church. He added that Catholic churches are usually older and are exempt from some of the standards due to their historical and architectural status.

There were no reports of religious detainees or prisoners in the country.

Forced Religious Conversion

There were no reports of forced religious conversion, including of minor U. S. citizens who had been abducted or illegally removed from the United States or who had not been allowed to be returned to the United States.

Abuses by Rebel or Foreign Forces or Terrorist Organizations

Religious leaders and practitioners were the targets of threats and kidnappings by guerrilla groups, former AUC members that refused to demobilize, and new criminal groups, generally for political or financial rather than religious reasons. These groups were responsible for the majority of such attacks and threats, killing, kidnapping, extorting, and inhibiting free religious expression.

The Human Rights Unit of the Prosecutor General's Office continued to investigate the killings in past years of 14 members of the clergy believed to have been targeted because they were outspoken critics of terrorist organizations. The Presidential Program for Human Rights reported that nearly all killings of priests by terrorist groups could be attributed to leftist guerrillas, particularly the FARC. Catholic and Protestant church leaders noted that

killings of religious leaders in rural communities were generally underreported because of the communities' isolation and fear of retribution. Religious leaders generally chose not to seek government protection because of their pacifist beliefs and fear of retribution from terrorist groups. A human rights organization affiliated with the Mennonite church, Justicia, Paz y Acción Noviolenta (Justapaz), and CEDECOL claimed that guerrillas, former AUC members that refused to demobilize, and new criminal groups equally committed violence against evangelical church leaders. New criminal groups, including the New Bolivarian Self-Defense Forces and the Aguilas Negras, targeted human rights organizations. Religious workers involved in human rights activities received death threats.

Most religious groups reported that due to threats from guerrillas, former AUC members that refused to demobilize, and new criminal groups, many religious authorities were forced to refrain from publicly discussing the internal conflict. Illegal armed groups, especially the FARC, threatened or attacked religious officials for opposing the forced recruitment of minors, promoting human rights, assisting internally displaced persons, and discouraging coca cultivation. The Catholic Bishops' Conference also reported that guerrillas, former AUC members that refused to demobilize, and new criminal groups issued death threats against rural priests who spoke out against them. In response to such threats, some religious leaders relocated to other communities.

Guerrillas, former AUC members that refused to demobilize, and new criminal groups harassed some indigenous groups that practiced animistic or syncretic religions; however, such harassment appeared generally motivated by political or economic differences (whether real or perceived) or by questions of land ownership rather than by religious concerns.

Section III. Status of Societal Respect for Religious Freedom

There were some reports of societal abuses or discrimination based on religious affiliation, belief, or practice. The Catholic Church and some evangelical churches reported that some indigenous leaders were intolerant of nonsyncretic forms of worship.

A number of faith-based NGOs promoted human rights, social and economic development, and a negotiated settlement to the internal armed conflict. The most influential of these organizations were either affiliated with the Catholic Church or founded by church officials. The Catholic Church was the only institutional presence in many rural areas and its Social Pastoral Agency conducted important social work.

Section IV. U.S. Government Policy

The U.S. Government discusses religious freedom with the Government as part of its overall policy to promote human rights. The U.S. Embassy maintained regular communication with representatives of the Catholic Church and other religious groups.